





Los impuestos destinados a pagar las pensiones se disparan un 38%

► El récord de ingresos, que crecen a un ritmo superior al 7%, no es capaz de hacer frente a los gastos

SUSANA ALCELAY
MADRID

Las pensiones no podrían pagarse hoy sin la ayuda de los impuestos y de la deuda pública. El desfase entre ingresos y gastos de la Seguridad Social aumenta irremediablemente, como también lo hace el endeudamiento del sistema, de más de 126.000 millones. En los últimos años el crecimiento de los ingresos ha sido histórico por factores como la creación de empleo y la subida de los sueldos, pero sobre todo por la espiral de aumentos de cotizaciones e impuestos, una vía a la que abrió las puertas de par en par la reforma de pensiones y se ha instalado en la economía.

La política de apretar el bolsillo de empresas y trabajadores ha ido a más en los últimos años. En este 2025 se han batido todos los récords para hacer frente al desembarco progresivo de los 'boomers' en el sistema, la generación de los 14 millones de personas que comenzó a jubilarse hace algo más

de dos años tras largas carreras de cotización, que les está dando ya el derecho a pensiones elevadas. Pero ese tirón de los ingresos sigue demostrándose insuficiente para pagar diez millones de jubilaciones, una factura disparada desde 2019 por la indexación de las nóminas al IPC. Factores todos que han elevado los desembolsos en más de un 40% en apenas seis años.

Los últimos datos de la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social reflejan cuál es la situación límite de sus finanzas, cómo cada vez es más necesario el recurso a los impuestos para pagar a los jubilados. Así, las transferencias recibidas por el sistema ascendieron hasta mayo a 15.452 millones, lo que supone un crecimiento del 30,8% en un año. Y dentro de las transferencias, la partida más significativa fueron las transferencias del Estado y organismos autónomos, alcanzaron los 13.359 millones, un 37,8% más.

Dentro de los ingresos destaca la inyección económica que supone el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se puso en marcha el 1 de enero de 2023 con el objetivo de volver a nutrir la denominada 'hucha de las pensiones'. Fue una de las medidas más controvertidas de la reforma del exministro José Luis Escrivá y

su incremento en el último año ha sido del 32,5%, hasta situarse en 1.955 millones. La idea del Ejecutivo es que el mecanismo, que se aplica a empresas y trabajadores, eleve el patrimonio del Fondo de Reserva hasta los 14.000 millones este año.

Son varios los expertos en pensiones los que destacan la contradicción que supone que se aporten ingresos a la 'hucha' en un momento en el que el sistema suma un déficit contributivo. Este es el motivo por el que se está realizando cada ejercicio una aportación creciente del Presupuesto, que en 2024 superó los 54.000 millones. Y dado el ritmo de gasto, será prácticamente imposible que esa cantidad se reduzca en el futuro.

Un superávit ficticio

Mantener esta política se ha convertido en la garantía de que el Estado respalda el sistema público de pensiones y que este es viable pese a sus números rojos que arrastra. Ese recurso a los impuestos para tapar los agujeros permite que el sistema de pensiones registre superávit, aunque ficticio. A 31 de mayo la Seguridad Social tuvo un saldo positivo de 2.835 millones.

Como avanzó ABC, los cálculos del último 'Pensiómetro', del Instituto Santalucía, sitúan el déficit contributivo del sistema en 31.315 millones, el equivalente a un 1,97% del PIB, un empeoramiento que rompe la estabilidad registrada entre 2022 y 2023. El déficit contributivo es la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones contributivas. Es, en definitiva, el nivel de cobertura que generan las cotizaciones sobre los gastos que soporta el sistema. El resto se tiene que financiar con impuestos o, directamente, con deuda pública, recursos disparados en los últimos ejercicios. Los préstamos del Estado han engordado el pasivo del sistema un 8% en un año, hasta superar los 126.000 millones, niveles desconocidos que condicionan el déficit del Estado.

El trabajo del Instituto Santalucía, que realizan primeros espadas del mundo académico, explica que el déficit de las pensiones podría haber sido incluso mayor si los ingresos por cotizaciones no hubieran crecido a un ritmo del 7%, un porcentaje que, sin embargo, se ha quedado corto frente al 6,7% en que ha crecido el desembolso en prestaciones, que ya rozó el 13% del PIB en 2024, un ejercicio en el que los pagos llegaron a 206.172 millones.

La partida que sigue escalando mes a mes y año a año es la destinada a pagar bajas laborales, la denomina incapacidad temporal, una prestación que se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Administración y para las empresas, que corren con los gastos entre los días 4 y 14. En el último año el desembolso ha crecido más de un 12%, hasta los 7.162 millones.

El futuro no es alentador. El coste del absentismo laboral derivado de contingencias comunes crecerá este año un 10%, hasta superar los 32.000 millones y las bajas crecerá más de un 6%, hasta superar los 9,2 millones, según CEOE.